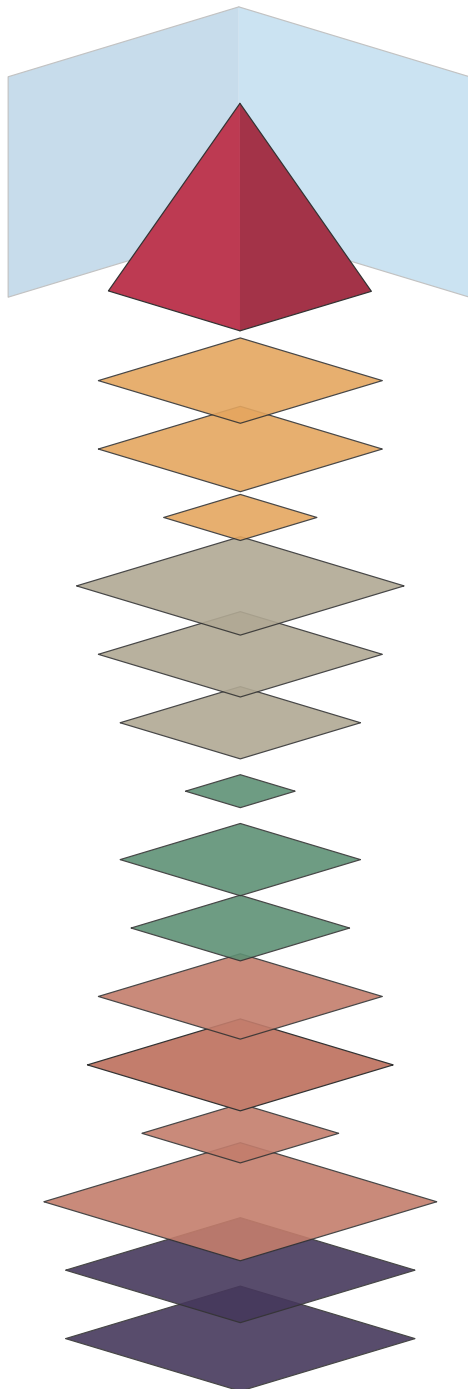




ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



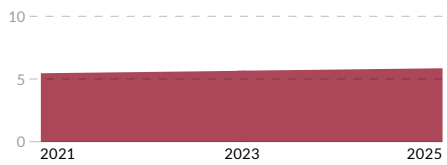
5.87 $\nearrow 0.20$

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

60.º de 193 países $\nearrow 7$

14.º de 35 países americanos $\nearrow 2$

1.º de 2 países de América del Norte -



MERCADOS CRIMINALES 6.13 $\nearrow 0.30$

TRATA DE PERSONAS 6.50 $\nearrow 0.50$

TRÁFICO DE PERSONAS 6.50 $\nearrow 1.00$

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN 3.50 $\nearrow 0.50$

TRÁFICO DE ARMAS 7.50 0.00

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 6.50 $\nearrow 0.50$

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES 5.50 $\nearrow 0.50$

DELITOS CONTRA LA FLORA 2.50 0.00

DELITOS CONTRA LA FAUNA 5.50 0.00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 5.00 $\nearrow 0.50$

COMERCIO DE HEROÍNA 6.50 0.00

COMERCIO DE COCAÍNA 7.00 0.00

COMERCIO DE CANNABIS 4.50 0.00

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 9.00 $\nearrow 0.50$

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA 8.00 0.00

DELITOS FINANCIEROS 8.00 $\nearrow 0.50$



ACTORES CRIMINALES 5.60 $\nearrow 0.10$

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 5.50 0.00

REDES CRIMINALES 6.00 0.00

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 4.50 0.00

ACTORES EXTRANJEROS 6.00 $\nearrow 0.50$

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO 6.00 0.00



Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos

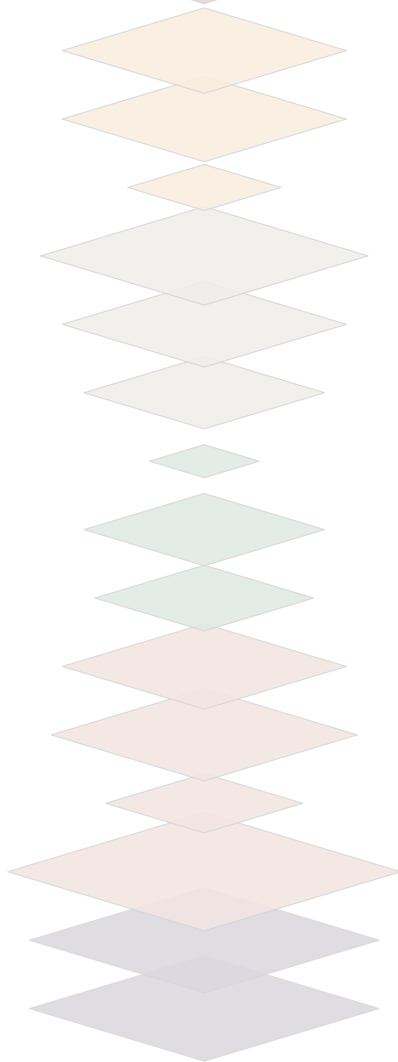
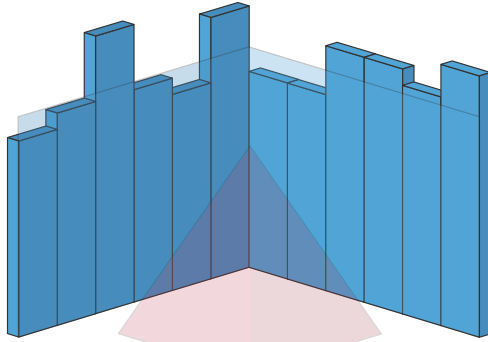


Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



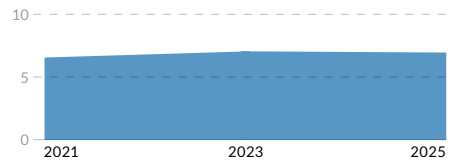
6.96 \searrow 0.17

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

27.º de 193 países \searrow 3

3.º de 35 países americanos -

2.º de 2 países de América del Norte -



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA **6.00** 0.00

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS **6.50** \nearrow 0.50

COOPERACIÓN INTERNACIONAL **8.50** \searrow 0.50

POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES **6.50** 0.00

SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN **6.00** 0.00

CUERPOS DE SEGURIDAD **8.00** 0.00

INTEGRIDAD TERRITORIAL **6.00** \searrow 0.50

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO **6.00** \searrow 0.50

CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA **7.50** \searrow 0.50

APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS **7.50** 0.00

PREVENCIÓN **7.00** 0.00

ACTORES NO ESTATALES **8.00** \searrow 0.50



Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Estados Unidos sigue siendo un centro importante de la trata de personas, ya que actúa como país de destino, de tránsito y de origen. Este mercado está impulsado principalmente por la demanda local y por las redes transnacionales y concentra una actividad significativa a lo largo de la frontera con México. Los funcionarios estatales corruptos y los actores del sector privado suelen intervenir en esta dinámica y explotan a las poblaciones vulnerables. Las víctimas proceden de diversas regiones del mundo y los países de origen más comunes son Honduras, Guatemala y México. La crisis fronteriza ha agravado la trata y los menores no acompañados, los migrantes y los solicitantes de asilo son los más vulnerables. La ponen en práctica las organizaciones criminales, las bandas nacionales, grandes empresas y personas que ocupan puestos de autoridad. Los sectores más comunes para la explotación laboral son la agricultura, la construcción, la hostelería y el servicio doméstico, mientras que la trata con fines sexuales se facilita a través de burdeles, salones de masajes, plataformas en línea y operaciones a pie de calle. A las víctimas se las atrae con falsas ofertas de trabajo y se las obliga a trabajar en condiciones de servidumbre en los diversos sectores. Los esfuerzos para combatir la trata encuentran retos, debido a las lagunas en los marcos jurídicos y en particular en los programas de visados y en los centros de detención de inmigrantes, lo que aumenta la vulnerabilidad de las víctimas migrantes.

El mercado del tráfico de personas se concentra principalmente a lo largo de la frontera con México, donde las organizaciones criminales latinoamericanas, los «coyotes» (traficantes de personas) y las redes de los clanes controlan las rutas. La demanda de servicios de tráfico de personas ha aumentado, debido a unas políticas migratorias cada vez más restrictivas. Los traficantes ofrecen distintos niveles de servicios, desde paquetes «con todo incluido» hasta modelos de «pago por uso». Los cárteles mexicanos, como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, gravan y supervisan las operaciones de tráfico y a menudo combinan el tráfico de personas con el de drogas y el de armas. El creciente número de encuentros fronterizos indica una demanda creciente de estos servicios ilícitos. La violencia sigue siendo generalizada y los migrantes son víctimas de secuestros, extorsiones y trabajos forzados a lo largo de las rutas del tráfico. La extorsión y los cobros ilegales por protección no están demasiado consolidados en Estados Unidos, pero se producen en empresas delictivas localizadas, en las que participan los grupos de tipo mafioso, las pandillas y las redes del crimen organizado. Han surgido casos en los que están implicadas familias mafiosas italoamericanas, organizaciones latinoamericanas y redes transnacionales de extorsión a migrantes, sobre todo a lo largo de la frontera con

México. Estos episodios ponen de relieve el resurgimiento de la delincuencia organizada y de las tramas de extorsión de alto nivel. Los actores criminales se dedican a la usura, a extorsionar a los sindicatos y a las tramas para el rescate de migrantes y a menudo recurren a la intimidación y la violencia.

TRÁFICO

Estados Unidos es un actor clave en el mercado mundial del tráfico de armas, ya que actúa como proveedor y también como lugar de tránsito. Más de la mitad de las armas de fuego incautadas en México proceden de Estados Unidos y el contrabando se facilita mediante las ventas a testaferros y el «tráfico hormiga», que consiste en el contrabando a pequeña escala para evitar su detección. Las rutas del contrabando aprovechan la debilidad de las leyes estatales sobre armas, que facilitan los flujos ilegales hacia México, Haití y las islas del Caribe. El tráfico de armas de fuego se cruza con el de personas y el de drogas y esto alimenta la violencia y el crimen organizado. La demanda nacional de armas de fuego alimenta los conflictos entre bandas y el crimen organizado y las armas que se trafican contribuyen a la violencia urbana y a la guerra entre los cárteles.

El mercado de productos falsificados se ha extendido y los más falsificados son los artículos de lujo y los productos farmacéuticos y los electrónicos. Lo alimenta el comercio electrónico y la mayoría de las incautaciones de productos falsificados se producen en el correo internacional y en los mercados en línea. China, Turquía, Tailandia y Filipinas son los principales proveedores. El mercado está vinculado a la explotación laboral, ya que la producción de productos falsificados implica malas condiciones de trabajo. Los productos falsificados y en especial los farmacéuticos suponen un riesgo significativo para la salud pública, sobre todo porque cada vez más medicamentos ilícitos contienen fentanilo.

El comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, en particular los cigarrillos y el alcohol, está muy extendido y se debe más al contrabando entre estados que al tráfico internacional. Sobre todo se contrabandea entre estados que tienen tipos impositivos diferentes. Los estados con impuestos elevados, como Nueva York, California y Massachusetts, registran los índices más altos de contrabando entrante, mientras que los que tienen impuestos más bajos, como Virginia y Wyoming, son los proveedores. Las redes de contrabando van desde los pequeños actores hasta las organizaciones criminales. Las autoridades están cada vez más preocupadas por la posible expansión de los cárteles mexicanos hacia el tráfico de tabaco en Estados Unidos. Este mercado produce pérdidas importantes de ingresos fiscales y se entrecruza con las tramas de lavado de dinero.

MEDIOAMBIENTE

Estados Unidos tiene un mercado criminal de flora en crecimiento, pero poco denunciado, impulsado principalmente por el robo de plantas. Algunas especies de gran valor, como los cactus, las suculentas *Dudleya*, el sello de oro, el ginseng y las Venus atrapamoscas, son cada vez más codiciadas y los mercados en línea y los mercados negros discretos revelan la existencia de un comercio ilícito a gran escala. También hay tala ilegal, pero es limitada, porque predominan las industrias madereras legales. Los pequeños actores nacionales, poco organizados, operan principalmente en zonas apartadas, lo que dificulta su detección. Si bien algunas de estas plantas se venden al extranjero, sobre todo a Asia y a México, la mayor parte de las ganancias permanecen en Estados Unidos.

Los delitos contra la fauna son más amplios, ya que Estados Unidos es un país tanto de origen como de destino de especies que se comercializan de forma ilícita. El tráfico nacional se centra en especies como el oso negro, el borrego cimarrón, el alce y el esturión, mientras que las importaciones suelen proceder de América Latina y de las islas del Caribe. En la frontera con México a menudo se incautan vejigas de totoaba y especies exóticas. Los artículos de gran valor, como las vejigas de totoaba, las aletas de tiburón, el caviar ilegal y las partes del oso negro, alcanzan decenas de miles de dólares en el mercado negro.

Los delitos contra los recursos no renovables consisten principalmente en la extracción ilegal de oro y el contrabando. Estados Unidos es un gran importador de oro ilícito procedente de América Latina y el crimen organizado de Colombia, Perú y Venezuela blanquea sus ganancias a través del sistema financiero estadounidense. Otros minerales que son objeto del comercio ilícito son el cobre y la plata. También preocupa el comercio ilegal de uranio y de metales de tierras raras, sobre todo con unas rutas de contrabando conectadas con China y con Rusia. Las redes criminales extranjeras, con la ayuda de grupos nacionales, controlan este comercio, que está estrechamente vinculado al tráfico de drogas, el contrabando de armas y la trata de personas.

DROGAS

Estados Unidos tiene un comercio de heroína amplio y arraigado, al que abastecen, sobre todo, las organizaciones criminales mexicanas, con la colaboración de Colombia y de Afganistán. En el comercio participan organizaciones delictivas tanto extranjeras como nacionales y la mayoría de los traficantes son ciudadanos estadounidenses. Aunque el consumo de heroína ha quedado cada vez más eclipsado por el fentanilo y se han tomado medidas para contrarrestarlo, el suministro de esta droga persiste a unos niveles preocupantes.

El mercado de la cocaína sigue siendo muy amplio y lo abastecen, sobre todo, las organizaciones criminales colombianas y las peruanas y hay redes mexicanas que facilitan el tránsito. Las rutas del tráfico de cocaína que llegan a Estados Unidos son complejas. La droga se trafica a través de México y de las

islas del Caribe y a menudo se hacen reexpediciones. Las organizaciones criminales gestionan la distribución y así vinculan el comercio de cocaína con el tráfico de armas y la minería ilegal del oro. El consumo interno es significativo, aunque la demanda ha disminuido, a causa de las drogas sintéticas. En Estados Unidos se producen decenas de miles de sobredosis anuales relacionadas con la cocaína, a menudo mezclada con opioides sintéticos. Las incautaciones recientes de los cuerpos de seguridad han sido considerables, pero la cocaína sigue estando ampliamente disponible.

El mercado del cannabis está fragmentado, debido a las diferentes leyes estatales sobre su legalización. Aunque el mercado legal está creciendo, persisten las cadenas de suministro ilícitas, en particular con las redes criminales chinas y los proveedores mexicanos, que alimentan el comercio clandestino.

El mercado de las drogas sintéticas, con el fentanilo y la metanfetamina a la cabeza, representa la mayor amenaza relacionada con las drogas en Estados Unidos. A sobredosis de fentanilo se deben la mayoría de las muertes relacionadas con las drogas en el país y el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación dominan la producción. Los precursores químicos procedentes de China y de India alimentan este mercado, mientras que los grupos criminales mexicanos supervisan las operaciones de tráfico a gran escala. Las drogas sintéticas se blanquean cada vez más a través de redes de lavado de dinero y a menudo utilizan criptomonedas. La producción de metanfetamina en Estados Unidos ha disminuido, pero ha aumentado la fabricación en México, controlada por los cárteles, lo que garantiza un suministro constante. A pesar de las importantes incautaciones y detenciones de la DEA, los cárteles se siguen adaptando, camuflando los envíos y utilizando empresas ficticias.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

El mercado estadounidense de los delitos dependientes de la cibernética supone una grave amenaza, ya que afecta a infraestructuras fundamentales, como la sanidad, las finanzas, el transporte y la defensa. Los ciberataques, como el ransomware, el malware y la fuga de información, provocan pérdidas por valor de miles de millones. Los grupos extranjeros, principalmente rusos y chinos, desempeñan un papel clave, ya que emplean estrategias sofisticadas de piratería y se dirigen, sobre todo, a las infraestructuras públicas, las instituciones financieras y las empresas privadas. Una filtración de datos del Tesoro de Estados Unidos que tuvo lugar en el 2024 puso de manifiesto las vulnerabilidades de la ciberseguridad de terceros. Aunque hay grupos de trabajo federales que luchan contra la ciberdelincuencia, los retos persisten, debido a su naturaleza cambiante, lo que sitúa al país entre los principales mercados mundiales de delitos dependientes de la cibernética.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros están muy consolidados en Estados Unidos e incluyen el fraude, el robo de identidad, la evasión fiscal y la malversación de fondos. Los estados más afectados son California, Florida y Texas. Las estafas relacionadas con las compras y con la suplantación de identidad han aumentado y Vermont y Wyoming están a la cabeza en cuanto a la cantidad de casos. El mercado es muy lucrativo y reduce los ingresos fiscales y la integridad empresarial y las pérdidas se estiman en centenares de miles de millones de dólares al año. Las redes criminales aprovechan las lagunas jurídicas en las regulaciones estatales y utilizan empresas ficticias y cuentas en paraísos fiscales. Aunque todos los estados penalizan los delitos financieros, las inconsistencias normativas permiten las actividades ilícitas. La magnitud de las estafas por suplantación de identidad, en las compras, en el empleo y en los planes de inversión siguen aumentando y hace falta una supervisión más rigurosa. Según los informes, las pérdidas financieras por fraude han aumentado un 25 % en el 2024 y las víctimas pierden miles de millones de dólares al año por estas tramas.

ACTORES CRIMINALES

Estados Unidos alberga un panorama amplio y variado del crimen organizado, que comprende a las pandillas callejeras, las de motociclistas, las carcelarias y las mafias internacionales. Estos grupos ejercen un control territorial a nivel local, suelen participar en conflictos violentos y aprovechan las redes carcelarias para hacer sentir su influencia. Las actividades delictivas incluyen el tráfico de drogas y de armas, la extorsión, la trata de personas y los cobros ilegales por protección y algunos grupos imponen «impuestos» ilícitos a las empresas. La corrupción dentro de los sistemas penitenciarios y de los cuerpos de seguridad facilita sus operaciones, ya que debilita el control institucional. Aunque algunas facciones operan como entidades independientes, otras mantienen vínculos transnacionales, en particular con redes criminales extranjeras.

La amenaza constante que representan estos grupos se debe a que tienen acceso a las armas, a sus jerarquías organizadas y a su capacidad para eludir a los cuerpos de seguridad, gracias a la corrupción y a las vulnerabilidades sistémicas.

Las redes criminales estadounidenses operan con mayor fluidez que los grupos jerárquicos de tipo mafioso y se especializan en mercados ilícitos, como la distribución de drogas, el tráfico de personas y la ciberdelincuencia. Estas entidades, que tienen una organización flexible, suelen colaborar con las organizaciones transnacionales y se adaptan a las fluctuaciones del mercado y a las estrategias de los cuerpos de seguridad. Muchas de estas redes están vinculadas a pandillas callejeras nacionales o a cárteles extranjeros, lo que facilita el movimiento de estupefacientes a través de las fronteras. En particular, las mafias relacionadas con las drogas mantienen alianzas operativas con los cárteles mexicanos y desempeñan un papel fundamental en el tráfico de fentanilo

y de cocaína. Como tienen estructuras adaptables, estas redes son difíciles de dismantelar, ya que cambian a menudo de táctica para evitar los procesamientos. La violencia sigue siendo una característica distintiva de estos grupos, que a menudo la utilizan para controlar el mercado y para intimidar. El carácter descentralizado de las redes criminales plantea retos a los cuerpos de seguridad, ya que sus miembros operan en círculos fluidos y superpuestos, sin estructuras de mando identificables.

Aunque Estados Unidos dispone de salvaguardias institucionales relativamente sólidas contra la infiltración del crimen organizado, la corrupción de los funcionarios públicos sigue siendo motivo de preocupación. Se han hecho acusaciones relacionadas con operaciones comerciales con organismos extranjeros, aunque las pruebas definitivas siguen siendo escasas. Algunos funcionarios de nivel bajo, especialmente en los cuerpos de seguridad y en el control fronterizo, se han visto implicados en operaciones de contrabando o en la aceptación de sobornos. Los procesamientos por corrupción han disminuido en los últimos años, lo que suscita preocupación sobre la eficacia de la aplicación de la ley. No obstante, los mecanismos de supervisión reguladora y los organismos de investigación independientes tratan de limitar el impacto de los actores integrados en el Estado en el crimen organizado. A pesar de algunos incidentes aislados, en Estados Unidos los actores integrados en el Estado no ejercen una influencia generalizada sobre los mercados criminales.

Las organizaciones criminales transnacionales configuran en gran medida el panorama del crimen organizado en Estados Unidos, donde está muy arraigada la presencia de los cárteles mexicanos, las mafias balcánicas y las organizaciones criminales asiáticas. Los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, dominan las operaciones de tráfico de drogas y suministran heroína, cocaína y drogas sintéticas a los mercados nacionales. Los grupos criminales balcánicos se dedican al contrabando de armas y a la trata de personas, aprovechando sus redes establecidas en Europa. Las organizaciones criminales asiáticas, en particular las de China y el Sudeste Asiático, contribuyen a la ciberdelincuencia, el fraude financiero y el contrabando de precursores de drogas. Los ciberdelincentes rusos y de Europa del Este desempeñan un papel crucial en los delitos propiciados por la cibernética, como los ataques de ransomware y la injerencia electoral. La omnipresencia de estos actores extranjeros pone de relieve la complejidad de la criminalidad transnacional en Estados Unidos, donde las asociaciones internacionales alimentan el comercio ilícito y los delitos financieros.

El sector privado estadounidense ha facilitado el crimen organizado y ha sido explotado por él, mediante irregularidades financieras, la evasión fiscal de las empresas y las lagunas normativas. Algunos sectores, como el inmobiliario, el de los artículos de lujo y el de los servicios financieros, se han visto implicados en el blanqueo de fondos ilícitos. El papel de las instituciones financieras con sede en Estados Unidos en la evasión fiscal extraterritorial ha quedado patente en investigaciones como la de los Papeles de Pandora,

que sacaron a la luz el uso de determinados estados como paraísos fiscales. Además, se ha vinculado a algunas empresas situadas en la frontera con México con operaciones de trata de personas, lo que, de forma consciente o inconsciente, ha facilitado la actuación de las redes criminales. Aunque la corrupción en el sector público sigue siendo relativamente

baja, las malas prácticas empresariales y la opacidad de las prácticas financieras crean vulnerabilidades que el crimen organizado aprovecha. La complejidad de la criminalidad en el sector privado, sobre todo en los mercados de gran valor, sigue planteando importantes retos para la aplicación y la supervisión de la normativa.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Joe Biden, mantuvo una postura activa contra el crimen organizado, sobre todo en cuanto a la lucha contra el tráfico de drogas y la trata de personas. Las directivas presidenciales hacían hincapié en la lucha contra las redes criminales transnacionales, lo que refleja la prioridad que el país otorga al crimen organizado como una cuestión de seguridad nacional y también como un asunto político. Sin embargo, la estructura federal, junto con la diversidad de las leyes estatales, dificulta la uniformidad en la aplicación de la ley y la gobernanza. El indicador de la calidad normativa sigue siendo alto, pero las divisiones políticas internas y las élites divididas en facciones plantean retos para una gobernanza unificada. Estados Unidos no ha experimentado conflictos internos recientemente, pero sigue involucrado en conflictos externos, como los de Ucrania y Palestina, mientras continúan las tensiones geopolíticas con Rusia, Corea del Norte y China.

Estados Unidos ha puesto en marcha varios mecanismos de lucha contra la corrupción, como la creación del Centro Anticorrupción y una estrategia nacional de lucha contra este delito. Según los indicadores, hay un control moderado de la corrupción, aunque persiste la desconfianza de la población hacia la élite política, alimentada por la preocupación por la transparencia y la supervisión normativa. La independencia judicial y la transparencia presupuestaria siguen siendo elevadas, aunque algunas sentencias judiciales recientes han suscitado preocupación, por las limitadas facultades de procesamiento en la lucha contra la corrupción. Aunque algunas iniciativas gubernamentales, como el restablecimiento de las ruedas de prensa periódicas en la Casa Blanca, han mejorado los esfuerzos en materia de transparencia, las iniciativas legislativas para mejorar la ética y la supervisión siguen estancadas.

Estados Unidos cumple las normas internacionales sobre crimen organizado, corrupción y comercio ilícito y participa en múltiples convenios internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y diversos tratados contra la corrupción. Mantiene una amplia red de tratados de extradición, aunque la cooperación con algunos países es limitada. Con la administración Biden, el país volvió a colaborar con las

instituciones mundiales, pero aún no se han resuelto algunos retos, sobre todo en lo que respecta a las políticas migratorias y a las tensiones diplomáticas con México. Estados Unidos también ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la ciberdelincuencia y contra los delitos ambientales y ha encabezado iniciativas de financiación internacional para reforzar la prevención de la criminalidad transnacional.

El país mantiene un marco jurídico completo para combatir diversas formas del crimen organizado, como el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia y la trata de personas. Sin embargo, las lagunas normativas en las leyes sobre las armas de fuego y las políticas de inmigración siguen siendo retos importantes. Aunque el país ha promulgado leyes estrictas contra el tráfico de drogas, las incoherencias entre las leyes estatales y las federales, en particular en lo que respecta a la regulación del cannabis, dificultan su aplicación. La legislación sobre la ciberdelincuencia sigue siendo compleja, debido a la superposición de competencias jurisdiccionales y, aunque las importantes inversiones de las empresas han reforzado la lucha contra la falsificación, persisten las lagunas en la regulación de los mercados en línea y del fraude digital. No obstante, Estados Unidos mantiene el firme compromiso de luchar contra el crimen organizado y sigue adaptando su marco jurídico para hacer frente a las nuevas amenazas.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

A pesar de contar con un sistema jurídico sólido, el descontento público con el Poder Judicial sigue siendo elevado: preocupan la parcialidad judicial, el encarcelamiento masivo y las disparidades raciales en las sentencias. El sistema penitenciario estadounidense se enfrenta a importantes retos, como el hacinamiento y los elevados índices de reincidencia. La actividad de las pandillas carcelarias y la violencia en los centros de detención agravan aún más estos problemas. Además, la independencia judicial está cada vez más presionada y preocupa la influencia política en los nombramientos judiciales a nivel estatal.

Los cuerpos de seguridad estadounidenses operan a través de una amplia red de organismos federales, estatales y municipales y hay unidades especializadas que se ocupan de diferentes aspectos del crimen organizado. A pesar de

la sólida financiación y de los recursos disponibles, algunos retos, como la discriminación racial, el uso excesivo de la fuerza y la conducta indebida de la Policía, debilitan la confianza de la población en los cuerpos de seguridad. Las muertes relacionadas con la Policía siguen siendo un problema grave, que afecta de manera desproporcionada a los grupos minoritarios.

Por las extensas fronteras terrestres que comparte con Canadá y con México, Estados Unidos se enfrenta a retos constantes en la gestión de los flujos migratorios, y el tráfico de drogas y el de personas. Aunque se han hecho grandes inversiones en la seguridad de las fronteras, las redes criminales transnacionales siguen aprovechando las lagunas normativas. El país sigue siendo el líder mundial en ciberseguridad, pero persisten las amenazas cibernéticas de los actores extranjeros, lo que pone de relieve las vulnerabilidades de la infraestructura digital. El Gobierno ha dado prioridad a la ciberdefensa y ha hecho inversiones importantes en inteligencia y en iniciativas de lucha contra la ciberdelincuencia.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Estados Unidos ha implementado medidas sólidas para luchar contra el lavado de dinero, pero cuesta aplicarlas, porque los organismos de supervisión financiera disponen de recursos limitados. La importancia del dólar estadounidense en las finanzas mundiales hace que el país sea especialmente vulnerable a las actividades financieras ilícitas. Algunas reformas recientes, como la introducción de unos registros de la propiedad efectiva, pretenden hacer frente a la opacidad financiera, pero siguen existiendo dificultades para frenar eficazmente los flujos financieros ilícitos. Se ha sancionado a los principales bancos por no informar de las transacciones ilícitas.

Aunque Estados Unidos sigue siendo una de las economías más grandes y más dinámicas del mundo, la desigualdad económica no para de crecer, sobre todo entre las personas sin estudios superiores, que se enfrentan a salarios más bajos y a mayores presiones financieras. El aumento de los gastos de salud y los problemas para acceder a una vivienda aumentan aún más las disparidades socioeconómicas. Se reconoce a Estados Unidos por su nivel elevado de libertad económica. Sin embargo, las instituciones reguladoras tienen cada vez más supervisión y preocupa la influencia política, que debilita la confianza pública en la Reserva Federal y en otros organismos financieros.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Estados Unidos mantuvo los servicios de apoyo a las víctimas durante la administración Biden, con programas financiados con fondos federales que proporcionaban asistencia integral a las víctimas de la trata y de otros delitos. Estos servicios abarcaban la atención médica y de salud mental, el alojamiento,

la asistencia jurídica, la formación profesional y el apoyo financiero. Sin embargo, las ONGs siguen siendo las principales proveedoras de servicios y las organizaciones sin ánimo de lucro y las religiosas lideran el apoyo a las víctimas y los testigos. El marco legislativo estadounidense para combatir la esclavitud moderna es potente y cumple con la mayoría de las normas internacionales. El Programa de Seguridad para Testigos ofrece una protección sólida y no se conocen violaciones de la seguridad ni se han registrado daños a los participantes. A pesar de estos esfuerzos, el acceso a la asistencia a largo plazo para las víctimas, en particular para los supervivientes de la trata con fines de explotación laboral, sigue siendo desigual en los distintos estados.

La administración Biden implementó mecanismos preventivos para combatir el tráfico de drogas y la trata de personas y se ha centrado sobre todo en iniciativas respaldadas por investigaciones. Aunque ha aumentado la inversión en el tratamiento de las adicciones y en las campañas de sensibilización, la drogadicción y el tráfico siguen siendo problemas importantes, especialmente en lo que respecta a los opioides y el fentanilo. El país también ha realizado importantes inversiones para prevenir la ciberdelincuencia y ha mejorado la cooperación entre los organismos federales y los socios del sector privado. La prevención de los delitos contra el medioambiente ha cobrado impulso y Estados Unidos encabeza iniciativas internacionales contra la tala ilegal y el tráfico de especies silvestres. También se han introducido sanciones financieras y medidas reglamentarias reforzadas contra las redes del comercio medioambiental ilícito.

Estados Unidos mantiene fuertes medidas constitucionales para proteger la libertad de prensa, aunque persisten las violaciones, que incluyen la detención y las agresiones a periodistas. La polarización de los medios de comunicación se ha profundizado, lo que debilita la confianza del público y contribuye a una desinformación generalizada. Aunque la administración Biden mejoró la transparencia de los medios de comunicación, aún no se han abordado algunas cuestiones, como la disminución de las noticias locales, el impacto de las redes sociales en el periodismo y el acoso en línea. Los periodistas se enfrentan a amenazas cada vez mayores, especialmente en los entornos con gran carga política. Los sindicatos siguen perdiendo afiliados y enfrentan retos legislativos, lo que reduce su influencia para defender a los trabajadores. A pesar de todos estos contratiempos, las organizaciones de la sociedad civil siguen activas en la reforma de la justicia penal, la defensa del medioambiente y los esfuerzos en materia de derechos humanos. La violencia política, que incluye el extremismo de extrema derecha, parece estar aumentando.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.